

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Córdoba por la que se anula el concurso convocado por esta Corporación para el nombramiento de Recaudador de Contribuciones e Impuestos del Estado de la zona de Peñarroya-Pueblonuevo.

Como consecuencia de la orden del excelentísimo señor Ministro de Hacienda de fecha 19 de septiembre último, modificando la demarcación de la zona de Peñarroya-Pueblonuevo, se anula el concurso convocado por esta Excm. Diputación Provincial para el nombramiento de Recaudador de dicha zona, cuya convocatoria apareció publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 186, de 3 de agosto próximo pasado.

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiéndose que quedan sin efecto las instancias presentadas para tomar parte en el mismo.

Córdoba, 4 de noviembre de 1968.—El Presidente.—6.247-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Sevilla por la que se anuncia concurso con prueba de aptitud para proveer tres plazas de Cobradores de Recaudación Voluntaria.

La Comisión Municipal Permanente, en sesión celebrada el día 29 de octubre del año en curso, se ha servido acordar la convocatoria del concurso con prueba de aptitud para proveer tres plazas de Cobradores de la Recaudación Voluntaria, aprobando para regirlo las siguientes

B A S E S

1. **Convocatoria:** Se convoca concurso con prueba de aptitud para proveer tres plazas de Cobradores de la Recaudación Voluntaria, dotada con los haberes del grado 6, Ley 108/1963, de 20 de julio.

2. **Requisitos de admisión:** Además de los establecidos en el artículo 19 del Reglamento de Funcionarios de Administración Local se exigirá una edad mínima de veintiún años, sin exceder de cuarenta y cinco, y la posesión del certificado de estudios primarios. El exceso en el límite de la edad será compensado con servicios computables prestados a la Administración Local.

3. **Presentación de instancias:** En el Registro General de la Secretaría Municipal, durante los treinta días hábiles que sigan a la inserción de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Se acompañarán certificados de los méritos que aleguen los aspirantes a efectos del concurso, y resguardo de haber ingresado en la Caja Municipal cincuenta pesetas por derechos de examen.

4. **Composición del Tribunal:** Presidente, el señor Teniente de Alcalde Delegado de Personal. Vocales: El Secretario general de la Corporación, el Depositario de Fondos, un representante del Profesorado Oficial y otro de la Dirección General de Administración Local. Secretario: Un funcionario técnico-administrativo, designado por el titular de la Corporación.

5. **Desarrollo de la prueba de aptitud:** La prueba de aptitud constará de dos ejercicios eliminatorios y a celebrar en único llamamiento.

5.1 El primer escrito consistirá en desarrollar en un máximo de dos horas, un trabajo de redacción sobre tema propuesto por el Tribunal y en resolver dos problemas de aritmética, que podrán versar sobre operaciones fundamentales con números enteros, fraccionario o decimales sistema métrico, regla de tres o interés simple.

5.2. El segundo oral consistirá en contestar, en un máximo de treinta minutos dos temas sacados a la suerte de entre los que figuran en el programa anexo.

5.3 El Tribunal calificará cada ejercicio con puntuación entre cero y diez, siendo necesario para aprobar la obtención de un mínimo de cinco puntos.

5.4 Con carácter voluntario, los opositores que aprueben los dos ejercicios eliminatorios podrán realizar una prueba de manejo de máquina de calcular o de mecanografía, con velocidad no inferior a 150 pulsaciones por minuto. La puntuación en cada una de estas pruebas no excederá, en ningún caso, del diez por ciento de la total obtenida en los ejercicios eliminatorios.

6. **Valoración de méritos:** Calificado el último ejercicio, el Tribunal procederá a la valoración de los méritos acreditativos por los aspirantes aprobados. Serán méritos puntuables:

6.1. Los títulos académicos o profesionales. El Tribunal los apreciará discrecionalmente, observando la debida jerarquía entre ellos, y otorgando al más caracterizado un punto como máximo. Tendrán preferencia los títulos de índole mercantil.

6.2. Desempeñar o haber desempeñado igual o análogo cargo en esta u otra Corporación Local u organismo del Estado. Se computarán los años de servicios, otorgándose diez centésimas por cada año de servicio prestado en esta Corporación, y cinco centésimas por los prestados en otra Corporación Local u organismo del Estado.

7. **Propuesta de nombramiento:** El Tribunal formulará propuesta de nombramiento a favor de los tres aspirantes cuya suma por puntos, en ejercicios voluntarios, obligatorios y méritos sea mayor.

8. **Normas supletorias:** En lo no previsto en las bases se aplicarán las normas contenidas en la Ley de Régimen Local. Reglamento de Funcionarios de Administración Local y Reglamento de Oposiciones y Concursos.

Lo que se anuncia para general conocimiento.

Sevilla, 30 de octubre de 1968.—El Alcalde.—6.280-A.

ANEXO

Programa para el segundo ejercicio de la prueba de aptitud

1. Idea general del Municipio: el Ayuntamiento. El Alcalde. La Comisión Municipal Permanente. El Ayuntamiento Pleno.

2. Idea general de la provincia: la Diputación. Su Presidente. Los Gobernadores civiles.

3. Ingresos y pagos. Recaudación y depósito de fondos.

4. Rendición de cuentas de las Corporaciones Locales.

5. Concepto del Servicio recaudatorio. Objeto. La recaudación inmediata, mediata, ordinaria y accidental. Comienzo de la misma. Sistema. Gestión directa.

6. Ingreso directo. Plazo. Formas. Por recibos: su expedición. Ingreso de valores en caja. Entrega a la recaudación. Regulación de cobranzas. Papeleta impresa.

7. Cobro a domicilio. Recaudación accidental. Incurción en apremio. Relación de deudores. Ingreso de lo recaudado.

8. Rendición de cuentas. Cuenta simple por valores en recibo, en voluntario. Justificantes de esta cuenta. Comisiones liquidadoras y señalamiento para las liquidaciones.

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

RESOLUCION de la Dirección General de los Registros y del Notariado en el recurso gubernativo interpuesto por el Procurador don Manuel María Rodríguez Azcárate, en representación de la Compañía Mercantil «Centros de Formación Social, Sociedad Anónima», contra calificación del Registrador de la Propiedad de Aoiz.

Excmo. Sr.: En el recurso gubernativo interpuesto por el Procurador don Manuel María Rodríguez Azcárate, en representación de la Compañía Mercantil «Centros de Formación Social, S. A.», contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Aoiz a extender una anotación preventiva de demanda, pendiente en este Centro en virtud de apelación del funcionario calificador;

Resultando que don Salvador Lacuesta y López de Alda inscribió a su nombre y al amparo del artículo 205 de la Ley Hipotecaria, el 23 de enero de 1967 en el Registro de Aoiz, una finca rústica sita en Burlada, valle de Egües, paraje de Morea, que, según el expediente instruido, pertenecía a los hermanos Álvarez León, quienes la habían adquirido por herencia de su madre, y la donaron después al señor Lacuesta; que éste vendió dicha finca ya inmatriculada a los cónyuges don Víctor Gueembe Urdanoz y doña Andresa Urtiaga González, que la inscribieron a su favor el 6 de marzo siguiente; que, por otro lado, la misma finca la había adquirido la Compañía Mercantil «Centros de Formación Social, S. A.», de don Toribio Indurain Unciti, mediante escritura otorgada el 20 de mayo de 1965 ante el Notario de Pamplona don Juan García Granero Fernández; que presentada esta escritura en el Registro, fué denegada su inscripción por figurar ya inmatriculado el inmueble en la forma dicha; que, ante tal situación, la Compañía Mercantil «Centros de Formación Social, S. A.», interpuso demanda de juicio ordinario de mayor cuantía ante el Juzgado de Primera Instancia de Aoiz contra don Salvador La-

uesta y López de Aida, en la que se pedía la condena del demandado, haciéndole expresa imposición de costas por su temeridad y mala fe; que por otro sí se suplicaba al Juzgado librase mandamiento al Registrador del partido para que fuese tomada anotación preventiva de la demanda; y que también demandó el comprador a los nuevos titulares de la finca;

Resultando que presentados en el Registro mandamientos, ordenando la anotación de las demandas presentadas, se extendió la correspondiente a los últimos titulares registrales, produciendo el que se refería a don Salvador Lacuesta y López de Aida la siguiente nota literal: «Denegada la anotación preventiva de la demanda ordinaria en el precedente mandamiento por figurar inscrita la finca objeto de ella a favor de don Víctor Guembe Urdanoz por título de compra para su sociedad conyugal con doña Andresa Urtiaga González, personas distintas del demandado, en el tomo 1.773, libro 100 de Egües, folio 128 finca 8.235 inscripción segunda. Y siendo este defecto insubsanable, impide por ello, tomarse anotación de suspensión de la demanda»;

Resultando que el Procurador don Manuel María Rodríguez Azcarate interpuso, en la representación que ostentaba, recurso gubernativo contra la anterior calificación, y alegó: que, aunque la parte actora también tiene presentada demanda contra los últimos titulares registrales, interesa la anotación de la que dirige contra el primer titular, dada la diferencia entre inmatriculación e inscripción, y los distintos efectos jurídicos de una y otra; que el mandamiento para la práctica de la anotación pretendida se presentó en el Registro, dentro de los dos años de suspensión de los efectos de la inscripción inmatriculadora y forma parte del mecanismo registral de control y garantía articulado por el artículo 298 del Reglamento Hipotecario, por lo que debió admitirse y practicarse con relación a la inscripción inmatriculadora; y que la impugnación de la inscripción de los actuales titulares, debe ser considerada aparte, pues como reconoce la doctrina, las consecuencias prácticas son distintas, ya que si se consigue anular la segunda inscripción, pero no se conoce por el Juez el dominio del actor cuando pretenda actuar contra el primer titular, habrán transcurrido los dos años, durante los cuales el derecho del mismo estaba suspendido y, entonces, al adquirir firmeza, su posición sería inatacable;

Resultando que el Registrador informó: que lo establecido en el párrafo último del artículo 298 del Reglamento Hipotecario está previsto para el caso de que la finca registrada conforme al artículo 205 de la Ley Hipotecaria, continúe inscrita a favor del inmatriculante, pero no cuando ha sido transmitida a otra persona; que las inscripciones practicadas al amparo del artículo 205 producen efectos registrales aun dentro de los dos años de su fecha y, por tanto, tampoco se podrá practicar asiento alguno dentro de dichos dos años sin consentimiento del titular o sin un procedimiento adecuado; y que, finalmente, los asientos del Registro están bajo la salvaguardia de los Tribunales y producen todos sus efectos mientras no se declare su inexactitud;

Resultando que el Juez que intervino en el procedimiento informó: que está de acuerdo con lo manifestado por el Registrador, sin que aprecie la utilidad para el recurrente de una nueva anotación contra el primer titular, cuando tiene a su favor la anotación del segundo procedimiento contra los nuevos titulares; que si, como el recurrente dice, cabe la posibilidad de que se niegue en el segundo procedimiento su condición de propietario, no ve la razón de la anotación que pretende, puesto que la nulidad sólo puede pedirla quien sea parte interesada; y que los dos procedimientos del actor tienen el mismo fundamento, por lo que, en resumen, carece de finalidad la pretensión de su recurso;

Resultando que el Presidente de la Audiencia revocó la nota del Registrador por estimar que el artículo 20 de la Ley Hipotecaria debe ser armonizado con lo dispuesto en el 205, sin absorber una norma por otra, con objeto de conseguir una solución justa, de forma tal, que la fuerza ordinaria del tracto sucesivo canalice el mandamiento judicial para darle acceso al Registro mediante la anotación acordada; que la suspensión de efectos de la inscripción de inmatriculación regulada por el artículo 205 de la Ley Hipotecaria afecta al primer titular y a todos sus causahabientes, en virtud del principio de tracto sucesivo debidamente interpretado, por lo que no es preciso, en su caso, para la cancelación, el consentimiento a que alude la nota recurrida; que la existencia de los dos procedimientos judiciales iniciados no supone una inutilidad, sino que refuerza los efectos queridos por el legislador, evitando situaciones no deseables de emergencia; y que la anotación no debe condicionarse a la realidad del interés defendido, aparte lo aventurado de una apreciación anticipada del mismo y que, por otro lado, constituye función extraña al Registrador;

Resultando que el funcionario calificador se alzó de la resolución presidencial, insistiendo en sus anteriores argumentos con ampliaciones y aclaraciones a algunos extremos de los mismos;

Vistos los artículos 1, 20, 32, 34 y 205 de la Ley Hipotecaria; 298 del Reglamento para su ejecución, y la Resolución de este Centro directivo de 30 de junio de 1967;

Considerando que en juicio de mayor cuantía seguido contra don Salvador Lacuesta, inmatriculante de una finca ingre-

sada en el Registro al amparo del artículo 205 de la Ley Hipotecaria, y contra don Víctor Guembe y doña Andresa Urquialaga como actuales titulares registrales, se obtuvo la anotación de demanda ordenada sólo en cuanto a los segundos, por lo que la cuestión que plantea este recurso consiste en resolver si puede tener, además, lugar respecto de un asiento que ya no está vigente al haberse transmitido el inmueble por el inmatriculante;

Considerando que para que un mandamiento que ordene la práctica en el Registro de una anotación de demanda pueda cumplimentarse, es necesario que la finca sobre que versa aparezca inscrita a nombre del demandado, sin que pueda realizarse cuando lo está a favor de persona distinta de éste, por constituir un obstáculo insalvable derivado del principio establecido en el artículo primero de la Ley Hipotecaria, de estar los asientos registrales bajo la salvaguardia de los Tribunales y producir todos sus efectos mientras no haya sido declarada su inexactitud, criterio que confirma además el párrafo último del artículo 298 del Reglamento Hipotecario al presuponer la vigencia del asiento para que pueda tomarse la correspondiente anotación preventiva;

Considerando, por otra parte, que la anotación preventiva carecería de toda finalidad, ya que con la realizada sobre el inmueble de los actuales titulares se enervan los efectos de los posibles actos dispositivos que pudieran realizar, como consecuencia del juego de los principios hipotecarios y principalmente de la no aplicación del artículo 34 de la Ley, al constar en el Registro una causa que puede dar lugar a la anulación del derecho del otorgante y consiguiente cancelación de su asiento,

Esta Dirección General ha acordado, con revocación del auto apelado, confirmar la nota del Registrador.

Lo que con devolución del expediente original, comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid, 29 de octubre de 1968.—El Director general, Francisco Escrivá de Romani.

Excmo. Sr. Presidente de la Audiencia Territorial de Pamplona.

MINISTERIO DEL EJERCITO

ORDEN de 25 de octubre de 1968 por la que se conceden los beneficios de libertad condicional a dos reclusos.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 246 y 1.001 de Código de Justicia Militar, y previo acuerdo del Consejo de Ministros se conceden los beneficios de libertad condicional, por el tiempo de condena que les queda por cumplir, a los corrigendos del castillo de San Francisco del Risco (Las Palmas de Gran Canaria) Juan Vaquero Rodríguez, y del castillo de Galeras (Cartagena) Pascual Ferrer Martí.

Madrid, 25 de octubre de 1968.

MENENDEZ

ORDEN de 25 de octubre de 1968 por la que se conceden los beneficios de libertad condicional a varios reclusos.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 246 y 1.001 de Código de Justicia Militar, y previo acuerdo del Consejo de Ministros, se conceden los beneficios de libertad condicional, por el tiempo de condena que les queda por cumplir, a los corrigendos del castillo de San Francisco del Risco (Las Palmas de Gran Canaria) Miguel Gómez Ibarrola y Juan Ríos Sánchez, y del castillo de Galeras (Cartagena) Bernardo Celemin Ugidos.

Madrid, 25 de octubre de 1968.

MENENDEZ

ORDEN de 29 de octubre de 1968 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo dictada con fecha 25 de septiembre de 1968 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don José Cepero Cobeño.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, entre partes: de una, como demandante, don José Cepero Cobeño, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendi-